

Proyección internacional de España: su impacto en las relaciones con América Latina

Raynier Pellón Azopardo

Investigador
del Centro de Investigaciones
de Política Internacional (CIPI)

La proyección política de España hacia América Latina no puede instrumentarse al margen de su posición en el sistema de dominación global, y sus necesidades diplomáticas como estado comunitario, atlantista y capitalista.

Explicar el rol asumido por este país en las relaciones políticas internacionales y específicamente en su proyección hacia la región implica considerar, en nuestro análisis, el contexto económico y sociopolítico en que se instrumentó el proceso de adhesión español a la Comunidad Económica Europea (CEE); así como, su comportamiento en el marco institucional.

En este período, coincidente con la conformación de un nuevo sistema sociopolítico en España (1977-1985), la conjugación de variables esenciales terminó constituyendo un catalizador de los rasgos que distinguen a este país actualmente en el escenario internacional.

Durante el proceso de transición, diversos actores políticos asumieron el ingreso a la CEE como garante de

una genuina democratización del sistema político, progreso económico y fortalecimiento de la proyección exterior del país.

Este elemento, visto en su evolución, incidió en que el ejecutivo español se caracterizara en los marcos de la CEE por una continua asimilación de los cánones democráticos, y de seguridad euro occidental; identificándose con políticas que han estado dirigidas a garantizar, en primera instancia, la competitividad e intereses geoestratégicos del gran capital.

Desde América Latina (AL) la total inserción de España en organismos de poder internacional como la Unión Europea (UE) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha tenido un impacto significativo en el carácter de sus relaciones con la región, estructuradas fundamentalmente en tres dimensiones: la bilateral, las específicamente euro-latinoamericana y las estrictamente iberoamericana.

En las condiciones del mundo contemporáneo, donde el imperalismo pretende segar por la fuerza de la más moderna tecnología armamentista el mínimo intento de divergencia política y hasta cultural, con este artículo pretendemos desentrañar el rol asumido por España en el sistema internacional, un país que ante los gobiernos progresistas de Nuestra América, se pretende presentar como un modelo a seguir en términos democráticos; y

por consiguiente, paradigma del modelo neoliberal.

**Contexto en que se produce
el proceso de adhesión español a la UE:
condicionantes externos e internos
y sus impactos en la proyección
internacional de España**

Conocer el contexto económico y sociopolítico en que se instrumentó el proceso de adhesión a las Comunidades Europeas (1977-1985),¹ y los elementos que condicionaron su evolución, es esencial para analizar los derroteros de la España contemporánea y en particular su proyección exterior.

La conjugación de un grupo de factores, entre los que se encuentran las confrontaciones propias del período de guerra fría, los paulatinos cambios estructurales que se dieron dentro del sistema capitalista en el orden económico, político y social; así como las profundas transformaciones internas emanadas del proceso de transición español, constituyeron un catalizador de los rasgos que hoy distinguen a España y por tanto, objeto de análisis imprescindible.

La génesis y causa esencial de los mencionados cambios estructurales, podría ubicarse en el proceso de reconversión industrial. La revolución científico técnica y los avances de la informática aplicados al sistema productivo aceleraron la transnacionalización de este trayendo con-

¹ El 28 de julio de 1977, el Gobierno español presenta la solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas. No es hasta el 12 de junio de 1984 que son firmados en Madrid los instrumentos de adhesión, Tratado y Acta de adhesión.

secuencias trascendentales en los órdenes mencionados anteriormente a escala planetaria.²

En este sentido, la crisis global de energéticos (1973) ha sido reconocida por varios autores como el detonante que evidenció, con mayor claridad, las consecuencias socioeconómicas y políticas de la transnacionalización de la economía mundial. En el orden institucional, por ejemplo, se puede afirmar que el citado proceso minó los poderes económicos del estado-nación y su capacidad de influir en las fluctuaciones económicas. Muchas de las competencias que fueron exclusivas del Estado, pasaron a manos de organizaciones transnacionales, cuyo radio de acción superaba las fronteras territoriales y a su vez no tenían mayor compromiso social que ser fiel a las inhumanas leyes del mercado.

Al respecto, dos elementos se tornaron incuestionables durante los años setenta y ochenta: primero, las operaciones capitalistas se encontraban, en gran medida, fuera del control estatal y, segundo, el Estado de Bienestar³ como modelo comenzó a percibirse debilitado ante las nuevas condiciones de la economía mundial. Resulta ilustrativo que en los Estados occidentales crecieron los gastos sociales con mayor rapidez que sus ingresos, lo cual condicionó entre otros factores, el paulatino desmontaje de los amplios sistemas de

seguridad y asistencia social que caracterizaron a la economía de posguerra. Consecuentemente aumentaron los índices de pobreza y miseria incluso en los países más desarrollados, y trajeron consigo las desigualdades sociales y económicas de la nueva era.⁴

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de reconversión industrial también propició importantes transformaciones en la estratificación social euro occidental, particularmente vinculada con la fragmentación de la clase obrera en su conjunto. Durante las últimas tres décadas de la pasada centuria, aumentó el número de trabajadores altamente calificados en el ámbito industrial (ingenieros, profesionales); también se incrementó el personal administrativo, comercial y técnico, conocido como la “nueva clase media”, siendo este uno de los sectores que creció con mayor rapidez, mientras que el agrícola comenzó a mostrar los índices más bajos.

En el caso específico de España, aunque a un ritmo menos acelerado que en las primeras economías europeas, la modernización de la industria determinó el tránsito de una típica estratificación social rural, semiestamental y semindustrializada a una industrial. Ello implicó que las fuerzas políticas supervivientes del período prefranquista tuvieran que afrontar la transformación de sus

² Eric Hobsbawm: *Historia del siglo XX*, Editorial Félix Varela, Ciudad de La Habana, 2003, p. 412.

³ El modelo se basó en un amplio sistema de seguridad y asistencia social, unido a una economía mixta en la cual el Estado tenía bajo control directo las industrias y ramas más importantes.

⁴ Eric Hobsbawm: *Ob. cit.*

bases sociales tradicionales y adaptar su proyección programática al nuevo contexto.⁵

Los partidos socialdemócratas eurooccidentales, en particular, ante la transformación de su base social, compuesta básicamente por trabajadores con disímiles niveles de calificación, diferenciación sustancial de su poder adquisitivo y estilos de vida, abogaron en su gran mayoría por la flexibilización de su base teórico-programática con el propósito cardinal de ampliar su base electoral.

No obstante, ante un panorama económico inestable, donde se detuvieron los ascendentes índices de crecimiento experimentados durante los años cincuenta y sesenta, los máximos perdedores del espectro político fueron los partidos socialdemócratas. Uno de sus principales instrumentos para satisfacer las necesidades de sus electores —la acción económica y social a través de los gobiernos nacionales—, perdió protagonismo ante las nuevas condiciones de la economía mundial, lo cual propició que los partidarios del nuevo liberalismo pasaran a la ofensiva.

El avance de la ideología neoliberal en el contexto euro occidental tuvo una lógica incidencia en la proyección gubernamental española. El ascenso de gobiernos conservadores en países de relevancia internacional como Estados Unidos, Gran Breta-

ña, Alemania y Japón proyectaron una lógica en el funcionamiento de la economía internacional que terminó estableciendo límites evidentes para los partidos socialdemócratas, máxime para el PSOE,⁶ fuerza de un país intermedio.⁷ A comienzos de los años ochenta, estar a la altura de transmutado contexto sociopolítico implicó la transformación o eliminación paulatina de importantes postulados y principios que identificaron históricamente a esa fuerza política.

Una nueva generación, en clara confrontación con la dirigencia histórica, se propuso transformar los métodos de lucha política y otorgar al partido una imagen renovada, entendida como el aumento de la militancia; lo cual se logró, entre otros factores, por el reagrupamiento de diferentes grupos socialistas y el establecimiento de una política de alianzas abiertas a todas las fuerzas activas.

La citada estrategia tuvo como finalidad convertir al Partido en la principal fuerza española. Sin embargo, el objetivo de incorporar nuevos miembros a toda costa propició la entrada de militantes con diferentes concepciones del socialismo, lo cual condicionó la flexibilización de la base teórico-programática y minó la permanencia de históricos principios políticos, como la lucha de clase que quedó al margen del ideario partidista. Eliminar de sus Estatutos la

⁵ Para mayor información sobre el tema consultar: José Felix Tezanos, *Estructura de clases y conflictos de poder en la España post franquista*, Edicusa, Madrid, 1978.

⁶ El PSOE es una de las fuerzas políticas que mayor participación ha tenido en la configuración del actual modelo socioeconómico español. En igual medida, su accionar político en los marcos del proceso de transición constituyó piedra angular en la aproximación de España a los predios comunitarios.

⁷ Alfonso Guerra y Jose Felix Tezano: *La década del cambio diez años después del Gobierno Socialista (1982-1992)*, Editorial Sistema, Madrid, 1992, p. 33.

definición de Partido Marxista, también fue uno de los pasos dados por el nuevo liderazgo en busca de mayor aceptación. Al respecto, resulta muy ilustrativa una declaración de Felipe González enunciada en el XXVIII Congreso: “Si queremos llegar a transformar la sociedad, hemos de llegar al poder y para ello necesitamos 8 millones de votos. No tenemos más remedio que ampliar nuestra base hacia la derecha en ya”⁸

Como consecuencia, los postulados históricos dejaron de ser el motor de las acciones del PSOE para convertirse en un recuerdo patrimonial. En lo adelante, el proyecto político principal se basó en la consolidación de la “democracia” que consagraba a su vez la economía de mercado. La nueva proyección se asemejó con los lineamientos de la socialdemocracia euro occidental, potenciándose desde entonces la introducción de un discurso político centrado en la modernización y europeización del país.

Para los comicios de 1982, el PSOE presentó un programa alejado de cualquier proyección que pudiera obstaculizar su capacidad de manobra. Este tuvo un carácter esencialmente reformista, cuyo fin no fue cambiar el sistema económico existente, sino “humanizarlo”.

Los acontecimientos desde el intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981, junto con la descomposición interna de Unión de Centro De-

mocrático (UCD) y la incapacidad de los grupos de derecha para hacer un partido de carácter nacional que permitiese asentar, aún más, las bases de la transición, terminaron por abrir las puertas del gobierno al PSOE, partido que gobernó ininterrumpidamente hasta el año 1996.

Esta es una de las fuerzas políticas que mayor participación ha tenido en la configuración y evolución del actual sistema sociopolítico. Luego de las primeras elecciones generales celebradas en la España posfranquista (1977), este partido gobernó con mayoría absoluta durante diez años consecutivos (1982-1993) y ha resultado vencedor en 6 de los 12 comicios legislativos desarrollados hasta el momento (1982, 1986, 1989, 1993, 2004, y 2008).⁹

En cuanto al espectro político, resulta significativo destacar que las elecciones generales de 1982 marcaron una tendencia en la historia electoral de España. Los partidos parlamentarios con capacidad gubernamental quedaron reducidos a dos: PSOE y Alianza Popular, más tarde transformado en Partido Popular (PP). Los tecnicismos del sistema electoral creado durante la transición; así como las reformas implementadas hasta el momento, han consolidado la alternancia política de dos únicas fuerzas, recayendo en las mismas la responsabilidad de programar y ejecutar la política interna y externa de este país.

⁸ Biescas Gálvez y Gustavo Muñoz Barrutia: *Las contradicciones del socialismo: una aproximación a la historia política del PSOE en la transición (1972-1986)*, en <http://biblioteca2.uclm.es>, p. 11.

⁹ Le siguen Unión de Centro Democrático (UCD) con dos victorias y el Partido Popular (PP) con tres. En <http://www.parties-and-elections.de/countries.html>.

Sobre el accionar político del PSOE desde el poder, vale destacar que este constituyó una pieza clave para el definitivo anclaje español en la CEE. Podemos aseverar que bajo el discurso justificativo de la necesaria europeización, se instrumentaron las medidas económicas y socio-políticas, promovidas por la UE, y que propiciaron la adhesión de España. El resultado fue una legitimación política de apoyo a la desregulación del mercado y a los intereses del gran capital, evidenciándose una proyección análoga entre una fuerza de orientación socialdemócrata y una conservadora.

En sentido general, la llamada década socialista se caracterizó por la conjugación de políticas socioeconómicas de corte neoliberal y la instrumentación de programas cuyo objetivo principal fue la construcción de un incipiente Estado de Bienestar de orientación socialdemócrata.¹⁰ En el orden económico, el PSOE se propuso instrumentar una dinámica acorde con los rigurosos condicionamientos comunitarios. En este sentido se logró una reducción de la inflación, mayor equilibrio en la balanza de pago, aumento de las reservas de divisas, el saneamiento de las empresas públicas y una disminución del déficit público. Ello permitió contar con una economía razonablemente saneada.¹¹

Sin embargo, las medidas de ajuste instrumentadas con el fin de alcanzar el tan mencionado proceso de

modernización, como fueron la reestructuración del sistema productivo, junto con políticas de altas consecuencias sociales como la liberalización de los mercados, la moderación salarial, siguieron a nuestro juicio, una política de corte neoliberal. Estas fueron aplicadas bajo el discutible discurso de la “necesidad” casi obligatoria de consolidar la democracia y europeización del país, discurso repetido hasta establecer la dicotomía simplista de España como problema y atraso, y Europa como progreso y valores positivos.

La vocación atlantista evidenciada por importantes grupos de poder fue otro de los factores internos que propició el acercamiento español al bloque comunitario. Desde finales de los setenta la elite política española no tuvo reticencias en presentar el ingreso a la OTAN como un paso necesario para adherirse a la CEE; hecho que no tenía, ni tiene en la actualidad alguna vinculación jurídica.

El gobierno español no tardó en evidenciar que en el ámbito político militar optaba por constituir una pieza efectiva dentro de la estrategia defensiva de occidente,¹² posición que fue apoyada abiertamente por el PSOE, una vez obtuvo el poder político.

En lo adelante España estuvo abocada a corresponder los intereses geoestratégicos de las potencias occidentales. En el contexto de la gue-

¹⁰ Biescas Gálvez y Gustavo Muñoz Barrutia: Ob. cit.

¹¹ Alfonso Guerra y Jose Felix Tezano: Ob. cit., p 33.

¹² El 30 de mayo de 1982 España pasó a ser el decimosexto miembro de la OTAN.

rra fría, caracterizado en gran medida por la confrontación directa o no de bloques militares y la consolidación de zonas de influencia, su ingreso al esquema de seguridad noratlántico fue asumido como un paso a favor de las potencias occidentales y contra la alternativa sociopolítica que representaba la URSS.

Así también se logró atenuar el posible fortalecimiento de tendencias tercermundistas en sectores políticos y sociales españoles. A partir de entonces, su proyección ha estado en sintonía con los lineamientos de la OTAN, dejando en segundo plano a Hispanoamérica y a las causas genuinas de países árabes.

Culminado el proceso de transición español (1975-1985) quedó zanjada una nueva legitimidad constitucional, que instituyó un régimen democrático representativo a la usanza occidental y la implementación de una economía de mercado. El ingreso a la OTAN y a la CEE cerraba el conjunto de variables que hicieron a España, ante los ojos de las potencias occidentales, un paradigma a seguir por las repúblicas socialistas del Este europeo y los gobiernos progresistas de Nuestra América.

La España atlantista y comunitaria: ¿POSE vs PP?

Los conceptos ideológicos en que se fundamenta la proyección comunitaria de España, independientemente de la fuerza gubernamental, son en esencia armónicos. Sus posicio-

namientos ante elementos prioritarios de la actividad socioeconómica, política y de seguridad, en dicho contexto, así lo demuestran.

El creciente gasto militar, las intervenciones en diferentes conflictos bélicos, el uso de aeropuertos y bases españolas para las aventuras bélicas estadounidenses, el incremento de políticas neoliberales en detrimento del bienestar social español son fenómenos que han sido asumidos y promovidos por los gobiernos del PSOE, evolucionaron con el Partido Popular (PP) y permanecen en la actualidad.

Las diferencias que han existido en la proyección de ambas fuerzas hacia la Unión, aunque nada desdeñables, no han desvirtuado la coherencia preponderante de sus políticas, sosteniendo de forma permanente en la agenda gubernamental la profundización del proceso integracionista como una de sus principales prioridades.

Su incorporación al entramado institucional de la CEE en el año 1985 le permitió formar parte de un proceso en construcción. Así, ante objetivos prioritarios de la Unión como la creación de un mercado interior único, la unión monetaria o el objetivo de instrumentar una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), España se ha identificado con mecanismos cuya finalidad ha sido garantizar, en primera instancia, la competitividad y los intereses geoestratégicos del Gran Capital.

En sentido general, el acatamiento de las directrices comunitarias

para diversos ámbitos de la actividad económica, política y social española, figuran entre los elementos que han condicionado el descrédito e ilegitimidad de la política gubernamental ante los ciudadanos; tanto durante los mandatos del PSOE como los del PP. Con la alternancia de ambas fuerzas, la política socioeconómica más que un cambio de proyección ha experimentado una evolución natural hacia posturas cada vez más reaccionarias, radicalizándose las tendencias propias de la globalización neoliberal.

En pos de cumplir los criterios de convergencia¹³ y las directrices comunitarias ambas fuerzas han instrumentado políticas fiscales regresivas, lo cual ha favorecido que las grandes empresas obtengan cada vez más beneficios a costa del control salarial y del trabajo precario.

Al respecto, resulta ilustrativo que en el año 1993, cuando se iniciaron los pasos más importantes para alcanzar la integración monetaria en la UE, España ostentó el gasto público (como porcentaje del PIB) más bajo del bloque, lo cual se mantuvo como tendencia, puesto que en el año 2006 no sólo continuó siendo el país con menor gasto público (38,5% del PIB) sino que este como porcentaje del PIB fue mucho más bajo que en 2005.¹⁴

En el año 2007, con el inicio de la crisis inmobiliaria en EE.UU. y el

posterior estallido de la crisis económica mundial, se vio interrumpida claramente la etapa expansiva de la economía española, comenzando a disminuir considerablemente sus índices macroeconómicos, dando paso a un período de recesión técnica.

Ante las consecuencias sociales desatadas, la proyección gubernamental ha mostrado total apego a las directrices o medidas anticrisis acordadas en el seno de la Unión; donde los gastos no han estado dirigidos en lo fundamental a socorrer a los ciudadanos, lo que equivaldría a estimular el consumo, sino que fueron destinados a emitir significativos paquetes de rescates a las entidades financieras.

En este contexto, tanto el PSOE como el PP han mostrado importantes niveles de consenso, tal como demostraron con la reforma constitucional de 2011, la cual instituyó los límites del gasto público español y en los propios recortes sociales aplicados por ambas fuerzas.

En el ámbito de la seguridad han evidenciado el propósito de avanzar en el desarrollo de una identidad Europea de Seguridad y Defensa. Sin embargo, ante dicho objetivo nunca han pretendido desmarcarse de las directrices de la OTAN. En ese terreno Madrid ha promovido, desde el entramado institucional, la protección de los vínculos trasatlánticos, concibiendo los mecanismos de se-

¹³ La tasa de inflación media del país no puede sobrepasar en un 1,5% la media de los tres Estados miembros con la inflación más baja. El déficit de la administración pública y la deuda pública no pueden sobrepasar el 3% y 60% del PIB, respectivamente. Los tipos de interés, por su parte, no pueden superar en más del 2% el de los tres Estados miembros con mayor estabilidad de precios.

¹⁴ Vicenc Navarro: "Los costes de la integración de España a la UE", *El País*, Madrid, en <http://www.Elpaís.es>.

guridad comunitarios, como complemento y no como una alternativa a la OTAN.

En este terreno los niveles de consenso también han sido importantes entre ambas fuerzas. Diversos hechos lo ilustran, entre los que podríamos destacar la ambigüedad calculada del PSOE durante el referéndum de 1986 y en el que cambió su posición inicial para terminar promoviendo la permanencia de España en la OTAN; el posterior consenso con el PP para integrarse plenamente en las estructuras de mandos atlánticas en 1996; y como elemento de mayor actualidad, la posición consensuada de participar en el escudo antimisiles estadounidense.

Sin embargo, destacar los rasgos que han distinguido a España en el contexto comunitario y atlantista; así como, sus implicaciones para América Latina, requiere subrayar diferencias, nada desdeñables para la región, entre las fuerzas gubernamentales españolas.

Al respecto no puede ignorarse que el PP, ante los mencionados organismos de poder internacional, ha favorecido una orientación atlantistas con una relativa pérdida del europeísmo, contribuyendo a una visión de la UE subordinada a la hegemonía global de los Estados Unidos (EE.UU.), mientras que el PSOE se ha propuesto establecer un equilibrio entre la prioritaria construcción comunitaria y el mantenimiento de una alianza estratégica con EE.UU.¹⁵

En este sentido pudiéramos concluir que el PSOE se ha alineado con una visión de la UE como elemento moderador de la hegemonía unilateral de Estados Unidos. Apoya pues un neoliberalismo global regulado multilateralmente, en el que se logre un equilibrio de los distintos intereses y contradicciones de tipo imperialista. En pocas palabras, el PSOE, ideológicamente identificado con los intereses y leyes de la formación social capitalista, solo viene a constituir una figurada alternativa dentro del sistema de la democracia representativa.

Considerar este importante matiz resulta esencial para comprender el comportamiento de ambas fuerzas en el escenario latinoamericano, y específicamente su proyección ante los intereses estadounidenses en la región.

España: referente y mediador en la proyección comunitaria hacia América Latina

En los marcos de la Política Exterior y de Seguridad Comunitaria (PESC), España se ha distinguido por ser el punto principal de referencia, y mediador para la proyección de la UE hacia América Latina.

Una serie de objetivos explícitos han resultado prácticamente una constante en el discurso gubernamental: instrumentar un esquema de relaciones con América Latina que se corresponda con la comuni-

¹⁵ Edmundo Fayánas: "La nueva política exterior española", en <http://www.elinconformistadigital.com>

dad de tradiciones, historia y convicciones democráticas; propiciar desde los marcos de la Cooperación Comunitaria una acción homogénea que apoye económica y políticamente el desarrollo de modelos democráticos y la solución de conflictos. En un sentido general, acercar a la UE a los problemas dimanantes de la región latinoamericana con el fin de favorecer la seguridad, y desarrollo sostenido.

Sin embargo, el ingreso de España en la UE despertó expectativas en América Latina (AL) que a nuestro juicio superaron la capacidad y voluntad política de Madrid. Dos elementos han relativizado particularmente su capacidad de influencia y vulnerado el rol asumido como interlocutor del Bloque en sus relaciones hacia la región.

En primer lugar se destaca la capacidad de influir en las directrices de la Unión en términos de política exterior. La voz de España, aunque ha sido influyente en casi todas las decisiones que conciernen a AL, no puede determinar la proyección de la UE.

En el ámbito de la PESC son los Estados miembros agrupados en el Consejo los que disponen del monopolio de la iniciativa, las decisiones y puestas en práctica de la política exterior comunitaria. El sistema de votación contempla la unanimidad como requisito en la toma de decisiones, lo cual relativiza considerablemente los niveles de influencia de

España, e impiden considerar que sus posiciones puedan determinar unilateralmente la proyección de la Unión hacia la región.

En segundo orden y no menos importante debemos considerar el lugar que ha ocupado AL en la escala de prioridades euro comunitaria. Desde un punto de vista geoestratégico los cambios sociopolíticos y económicos que comienzan a evidenciarse en el Este europeo a finales de los años 80, terminan acaparando la atención del liderazgo comunitario.

Desde entonces, la UE se convierte en un catalizador del desmantelamiento del sistema socialista en las repúblicas del Este europeo, propiciando su transición hacia un nuevo modelo de relaciones productivas. Dicho proceso solo culmina, a nuestro juicio, con la quinta ampliación de la Unión iniciada en el 2004 y culminada en el 2007 con el ingreso de Bulgaria y Rumanía.¹⁶

De esta manera quedaba zanjado el propósito de imponer los derroteros de la economía de mercado en el Este; lo cual, a pesar de los costos trabajo enormes dividendos para el gran capital euro occidental, expresado en la flexibilización del mercado, la privatización a gran escala de empresas públicas, y la explotación de mano de obra barata y altamente calificada proveniente de las extintas repúblicas socialistas.

Sin embargo, el acelerado ingreso de dichas repúblicas a la UE aún sin

¹⁶ Como resultado de este proceso ingresaron al bloque en 2004 Estonia, Letonia, Lituania, Polonia República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. A estos se sumaron en 2007 Bulgaria y Rumanía.

haber establecido los soportes institucionales necesarios para amortiguar el choque económico, político, social y cultural que se derivaría de ella terminaron agudizando grandes problemas que venía experimentando la Unión; entre ellos podríamos destacar la ineficacia de sus estructuras a partir de un excesiva burocracia, la ralentización de los procesos decisivos, la escasa legitimidad y credibilidad de las instituciones ante los ciudadanos europeos, la preponderancia de intereses nacionales ante puntos sensibles de la agenda comunitaria y la existencia de fuertes contrastes en cuanto a los niveles de desarrollo económico de sus miembros.

En sentido general, el fin de la Guerra Fría coloca entre las prioridades de la UE la incorporación de los antiguos países socialistas de Europa del Este. Dicho proceso; así como sus consecuencias, se encuentra entre las variables que han exigido del liderazgo comunitario una mayor atención tanto de sus asuntos internos, como de los problemas procedentes de su área de influencia inmediata.

No obstante, el rol asumido por Madrid como interlocutor en la proyección de la UE hacia la región no debe desestimarse. Al respecto, varios autores consideran que la atención prestada por la Unión a los procesos políticos y económicos latinoamericanos, en las postrimerías de los años 80, es un mérito acuñado a las

posiciones defendidas por España en los principales órganos decisivos del bloque.

A esta época correspondió la institucionalización de dos diálogos: el de San José y el del Grupo Río, los cuales renovaron el apoyo al plan de contadora.¹⁷ Ambos pasaron a ser una iniciativa puntual que simbolizó la génesis de futuros mecanismos de cooperación política. Sin embargo, la proyección del bloque y particularmente la de España hacia AL se ha encontrado condicionada por los fuertes y trascendentales vínculos trasatlánticos.

Las presiones solapadas o no de EE.UU.; así como, la comunidad de intereses existentes entre ambos polos de poder, ha sido históricamente un factor que establece límites a la cooperación política de la UE, mientras que en el caso de España esta ha adquirido importantes matices en correspondencia con la naturaleza ideológica de la fuerza gobernante y las particularidades de su liderazgo.

Visto en su evolución, los elementos descritos han relativizado la capacidad española de alterar de forma sustancial el lugar periférico que AL ha ocupado en el conjunto de la política exterior comunitaria. Manteniéndose la baja prioridad del componente birregional, en el que la proclamada "Asociación Estratégica UE-América Latina" y las Cumbres que le sirven de sostén no pasan de superar el nivel de la retórica, lo cual contrasta con el interés por la firma

¹⁷ Formado en 1983 por los representantes de México, Panamá, Venezuela y Colombia, cuyo objetivo fue mediar en los conflictos centroamericanos.

de Acuerdos de Asociación a escala subregional y la focalización de la atención en actores individuales entre los que se encuentran Brasil, México, Argentina, y Chile.¹⁸

Balance de la proyección económica y política de España hacia América Latina

En un contexto global condicionado por la internacionalización de los procesos productivos, el capitalismo español ha requerido tanto en sus relaciones bilaterales como en su rol comunitario, crear condiciones favorables para la necesaria expansión de sus capitales. Ante tal objetivo, Latinoamérica se ha presentado como un área casi natural para sus empresas, cuyo vínculo histórico y cultural con el área ha terminado constituyendo un facilitador de sus pretensiones.

Fuera del ámbito europeo, América Latina ha ocupado un protagonismo indiscutible en la política exterior española. Así como sucedió en Europa, en esta región Madrid ha diversificado sus instrumentos políticos, económicos y de cooperación.

Coincidente con su ingreso en la UE (1985), el contexto sociopolítico y económico latinoamericano fue un terreno fértil para el capital privado y público español. Los profundos cambios que tuvieron lugar en los últimos años de la década, expresados en el remplazo de modelos económicos estatistas por otros de corte liberal, y las consecuentes rebajas arancelarias, privatización a gran

escala de sectores públicos; así como, la desregulación del mercado laboral, constituyeron un catalizador de dicho proceso.

En lo adelante, la denominada cooperación al desarrollo ha sido el instrumento por excelencia sobre el cual se han sustentado las diferentes dimensiones de su política exterior hacia la región. En su evolución, la condicionalidad política ha permanecido como un elemento central de los acuerdos, cuyo objetivo implícito ha sido propiciar la descentralización de los poderes estatales, la liberalización del mercado latinoamericano y consecuentemente el fortalecimiento de la iniciativa privada. Modelos que han vendido las potencias occidentales al Sur como vías de desarrollo, y que solo sirvieron para empobrecer a las naciones en favor de las transnacionales extranjeras.

Bajo el ropaje de interlocutor para las relaciones de la UE hacia la región, España ha sido un actor esencial en la promoción de acuerdos interregionales de cooperación económica y comercial, cuyos contenidos no han resuelto las asimetrías existentes entre la UE y AL.

La propuesta e instrumentación de acuerdos comerciales y financieros ajenos a las verdaderas necesidades de nuestra región, también han evidenciado falta de voluntad para ofrecer reales soluciones a los problemas del denominado Tercer Mundo. De esta manera, a fines de los ochenta y principios de los noventa, una proporción

¹⁸ Colectivo de autores. Escenario de Política Internacional de la Unión Europea. Obra inédita del Centro de Investigaciones de Política Internacional.

significativa de la cooperación se canalizó a través de créditos que tuvieron poco que ver con las necesidades de desarrollo en la región, y si con el propósito de ocupar un papel destacado en el mercado latinoamericano.

Sin embargo, la acción unilateral de España (Agencia Española de Cooperación Internacional) podía atender mínimamente los enormes problemas económicos y políticos, de manera que resultó de vital importancia motivar la cooperación de la UE en dichos términos; lo cual constituía un elemento clave para paliar el enorme esfuerzo presupuestario que implicaba una mayor presencia económica en la zona. El propósito de crear un Fondo Europeo de Garantía y avances como la apertura de una línea de crédito en el Banco Europeo de Inversiones persiguieron tal objetivo.¹⁹

Fomentar las relaciones entre la UE y AL también respondió al propósito de marcar sus propias áreas de influencia, dentro de una Comunidad donde las relaciones con algunos socios externos, como África, Estados Unidos, en cierta forma el Mediterráneo, ya contaban con estados miembros que las lideraban.

En las postrimerías de los años 80, el debate interregional comenzó a girar en torno a la operatividad de una relación triangular entre España, la UE y AL. En este contexto

preocupó particularmente, desde Nuestra América, las pérdidas que en términos comerciales implicaría el ingreso de Madrid a la Unión.

La UE pasó a ser el destino del 67% de las exportaciones españolas, la cuota de intercambios globales que correspondió a Latinoamérica cayó hasta constituir sólo un 3,6% de las exportaciones y 2,6% de las importaciones entre 1985 y 1990. Desde ese momento no ha dejado de progresar la importancia del mercado comunitario para Madrid, el cual en 1995 ya representaba el 73,35% del total de las exportaciones y el 65,38% de las importaciones.

Mientras el ingreso de España perjudicó las relaciones comerciales con la región, el compromiso de incrementar la cooperación proveniente de la UE fue notoriamente vago.²⁰

En los años 90 la relación con AL se caracterizó por un trato cargado de elementos político-declaratorios y más selectivos en los aspectos relacionados con el contenido económico. A pesar del indiscutible acercamiento del PSOE al acontecer político latinoamericano, su proyección se basó en actuaciones muy puntuales, dirigidas hacia una solución, no de los problemas económicos y sociales de largo plazo y de difícil salida, sino a encontrar una respuesta negociada al conflicto armado en que se hallaba Centro América.

¹⁹ Las capacidades de la Agencia Española de Cooperación Internacional eran limitadas. Por ejemplo: finales de los ochenta ejecutó aproximadamente 750 proyectos de cooperación en 55 países de América, pero todos ellos de recursos limitados y de impacto reducido. R. Cristino: Las inversiones españolas directas e inmobiliarias en el exterior durante el primer semestre de 1990, en *Boletín de Información Comercial Española*, Madrid, N 2259, diciembre 1990, p.16.

²⁰M. Buisan García, "La exportación de España a la CE en el último quinquenio (1985-1989)", en *Boletín de Información Comercial Española*, N 258, Madrid, noviembre-diciembre 1990, p. 37.

Más bien su política se dirigió a promover un interés explícito, tanto del Consejo de Europa como de la UE respecto a Centro América, en contra de las presiones directas e indirectas de la administración estadounidense. Sin embargo, sus diferencias con Washington nunca fueron antagónicas. Su disposición inicial a comprometer a la CEE en mediaciones en el área, se vio paulatinamente atemperada por la búsqueda de una solución democrática, con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, enmarcadas en una visión liberal clásica y se realizó en busca de una buena imagen de liderazgo, con pocos costos de enfrentamiento.²¹

En el orden político no debe desestimarse el papel del proyecto iberoamericano, una de las iniciativas más ambiciosas desarrolladas por España, a través de la cual ha pretendido dar coherencia a las relaciones con Latinoamérica y cuyo eje central han sido las Cumbres Iberoamericanas (CI).

Desde su génesis en 1991, el cónclave se ha convertido en un foro de consulta y concertación política de los Jefes de Estado y de Gobierno. El propio liderazgo latinoamericano, en este contexto, ha estrechado sus relaciones, identificado problemas comunes e impulsando actividades integracionistas.

Visto en su evolución, España ha perseguido, y en gran medida logra-

do, convertirse en puente del proceso integracionista europeo con el área. Sin embargo, en las Cumbres ha reproducido los rasgos de su proyección exterior, evidenciando una mayor sintonía con las directrices establecidas por occidente y vulnerado, no pocas veces, la posibilidad de establecer un diálogo respetuoso y fructífero con la región. En otro orden, las deficiencias estructurales y carente voluntad política han contribuido a que los resultados de las (CI) consistan fundamentalmente en posiciones declaratorias.

Desde la octava Conferencia Iberoamericana, Oporto 1998, se percibió un incremento del perfil economicista en la proyección española, lo cual tuvo una orgánica coherencia en su proyección bilateral. Este rasgo se tornó particularmente evidente con el ascenso del PP; cuyas alianzas políticas respondieron, en primera instancia, al propósito de mantener condiciones favorables al capital español.

En 1996 España invirtió más de 90 000 millones de dólares en AL. El 30% del valor de la Bolsa de Madrid dependió de ello, siendo determinantes para los beneficios de las grandes multinacionales españolas.²² Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), para el año 1999 España se convirtió en el sexto país en inversiones directas extranjeras, con una cifra superior a los 8 billones de

²¹ Joan Piñol Rull: "Las relaciones españolas con Centroamérica. El período de los gobiernos socialistas (1982-1988)", en *Afers Internacionals*, Barcelona, No. 14 y 15 de 1988, p. 6.

²² Las inversiones directas en AL experimentaron un aumento del 60% en los primeros ocho meses de 1990. En <http://www.eumed.net>.

pesetas.²³ Y en el año 2000, esa cifra superó los 10,5 billones. Gran parte de esa inversión, más de 4 billones, se dirigió hacia países iberoamericanos.

En un sentido comparativo lo sucedido entre 1998 y el 2000 supuso un vuelco en la actuación de las empresas españolas en el exterior. Si bien el fenómeno se gestó entre 1994 y 1997, el gran salto se manifestó a partir de 1998, no tanto por el monto global en esos años,²⁴ sino por el cambio paulatino del destino de sus inversiones.

En 1996 estas fueron mayoritariamente a Europa (52%), para pasar en 1997 al 44%, y estabilizarse en los años siguientes entre un 22% y un 28%; por su parte, AL pasó del 27% del total de inversiones en el exterior en 1996, al 37% en 1997, y situarse en los años posteriores en torno a cifras del 62% al 68%.²⁵ Esta concentración supuso que las empresas españolas llegaran a totalizar alrededor del 50% de la inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Colocándose en países de importancia estratégica como Argentina, Chile, Brasil y en sectores tales como la banca, el transporte, la energía eléctrica y las telecomunicaciones, con un papel clave de Telefónica.

Grandes empresas públicas lideraron la inversión española en el continente. Comunicaciones y transporte fueron áreas prioritarias. La Telefónica participó en las dos com-

pañías de teléfonos de Chile (CTC y ENTEL) y dos de Argentina (Telco Sur y ENTEL). Iberia participó con el 85% de las Aerolíneas Argentinas desde 1991, adquirió acciones en LADECO de Chile y compró el 60% de VIASA de Venezuela. Otras compañías públicas con intereses en el continente incluyen a Repsol, la empresa petrolera que llevó a cabo exploraciones conjuntas en México, Venezuela y Argentina con empresas locales.

Del sector privado, particularmente las compañías más grandes mostraron mayor interés. Entre ellas se destacaron Unión Fenosa, que realizó contratos para los servicios eléctricos en varias ciudades del continente, la empresa Torres, con intereses en vinos chilenos, Dragados y Construcciones que realizó proyectos en hospitales argentinos por un valor de 58 millones de dólares, y el suministro de equipos hospitalarios en Venezuela, con un contrato valorado en 33 millones de dólares aproximadamente.

No es de sorprender que los bancos españoles se hayan mostrado entusiastas a la hora de invertir en América Latina, dado que algunos de ellos se encontraban en un proceso de fusión y de internacionalización. El Santander llegó a tener oficinas de representación en casi todos los países, operaciones mercantiles en Venezuela, Chile, Argentina y Brasil, seguros en México, y un Banco Co-

²³ Tras Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y los Países Bajos.

²⁴ Las inversiones directas no llegaron a los 2,8 billones, por lo que el salto espectacular fue en el año 1999.

²⁵ Comisión de Asuntos Iberoamericanos. En <http://www.mae.es/>.

mercial en Chile. La estrategia planteada fue la implantación de su negocio tradicional en el mayor número de mercados posibles, a través de su participación creciente en entidades locales destacadas. Pero también diversificaron sus posiciones hacia nuevos sectores de actividad, tales como el de seguros, salud, los mercados de previsión social o pensiones.²⁶

En el orden político la proyección del PP hacia AL da continuidad a las directrices trazadas por el PSOE; compartiendo así, tanto los instrumentos de política exterior como sus dimensiones. Sin embargo, el Plan Estratégico de Acción Exterior concebido por el PP, aunque persiste en el objetivo de crear un auténtico espacio iberoamericano, adoleció de importantes fallas.

El PP, y particularmente la figura de Aznar, percibieron la relación con AL desde una visión esencialmente atlantista y como una dimensión de sus relaciones con los EE.UU. En este sentido, renunció a la posibilidad de articular acciones políticas, económicas y culturales, con instrumentos y recursos bien diseñados e identificados, que permitiera homogenizar la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales bajo los principios y objetivos de la política exterior española hacia la región.

Ante el Congreso de los EE.UU. Aznar se identificó con el intervencionismo histórico de Washington,

sin el menor asomo de crítica, matización o reparo. El aliado más fiel mostró un desprecio absoluto ante la memoria histórica y la sensibilidad de los pueblos ocupados, violentados, intervenidos o presionados por los estadounidenses.²⁷ Su proyección política hacia AL estuvo lastrada por consideraciones ideológicas, y su incondicional alianza con EE.UU., adoptando posiciones que a corto plazo se tornaron inconciliables ante los gobiernos progresistas y procesos de izquierda existentes en la región.

Al respecto, mención especial mereció Venezuela y Cuba, núcleos dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Bajo el justificativo de pretender preservar los derechos humanos, la gobernabilidad y el Estado de Derecho, el PP instrumentó una política abiertamente intervencionista, ilegal y de doble estándar. En el caso particular de Cuba, tales posiciones no solo afectaron las relaciones bilaterales con España, sino que tuvieron una repercusión significativa en el ámbito comunitario.

El ascenso del PP al poder en 1996, cuyos vínculos con la mafia anticubana de Miami también eran conocidos, el recrudecimiento del Bloqueo Económico, Comercial y Financiero estadounidense expresado en la Ley Helms Burton, y la utilización de campañas difamatorias sobre la coyuntura sociopolítica interna en Cuba, constituyeron el contexto sobre el cual se erigió la Posición

²⁶ <http://www.eumed.net>.

²⁷ Antonio Maira: "Aznar o la unidad de destino", en <http://www.Cádizrebelde.com>.

Común de la UE contra Cuba.

Basada en el “catálogo de medidas” presentado por el enviado especial de los Estados Unidos, Stuart Eisenstadt, y promovida por José María Aznar en los marcos del Consejo de la UE, la Posición Común dejó expresado los términos de un condicionamiento netamente político y marcadamente injerencista en sus relaciones con la Isla; cuya finalidad es promover la modificación de las bases del sistema político y económico cubano.

Con más o menos matices en cuanto a los medios para lograrlo, la UE con este paso evidenció la sintonía existente ante las políticas estadounidenses. También demostraba el doble rasero de su proyección hacia la Isla, cuyos referentes son los intereses y alianzas geoestratégicas del bloque, en este caso la existente con EE.UU., y no precisamente la defensa de modelos democráticos o de los derechos humanos en Cuba.

Múltiples hechos evidencian el carácter discriminatorio y el doble estándar de la UE en sus relaciones con la Isla. Cuba es el único país de América Latina y el Caribe y uno de los pocos en el mundo no vinculado a la UE por un acuerdo, el único de la región objeto de una Posición Común; lo cual contrasta con la relación existente con países cuya actuación democrática y en materia de derechos humanos es deplorable.²⁸

La Posición Común promovida por España en la UE, y cuyo contenido también es expresión del consenso ideológico existente en el bloque respecto al sistema político cubano, pretende ignorar que en Cuba existe un sistema democrático, legítimamente escogido por su pueblo de forma libre y soberana. Por cuanto, cualquier intento de revertir el orden existente es ilegal y viola las propias normas establecidas por el derecho internacional.

El Gobierno del PP también proyectó, en nombre de la democracia, una política injerencista y cómplice de los intereses hegemónicos de EE.UU. ante el incuestionable progreso de la Revolución Bolivariana. España no condenó el Golpe de Estado perpetrado en 2002 contra el Gobierno de Hugo Chávez, elegido limpia y holgadamente por su población, y pretendió dar pronta legitimidad al mismo. Al respecto, posteriores investigaciones han ilustrado su ayuda a la oposición en colaboración con EE.UU., cuyo único fin fue desestabilizar y derrocar al Gobierno venezolano, un acto que por mucho, resultaría condenable desde occidente, en caso de que un aliado fuese el afectado.²⁹

La herencia recibida por el PSOE en 2004, de los gobiernos del PP, fue de rompimiento y enfrentamiento. A lo largo de sus mandatos (2004-2011) enfrentó serias dificultades

²⁸ Eduardo Perera Gómez: “La Unión Europea y su papel en las relaciones Estados Unidos-Cuba”, en *Temas*, No. 62-63, La Habana, abril-septiembre de 2010.

²⁹ Para una mayor profundidad en el tema consultar denuncia realizada por Hugo Chávez en el contexto de la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile y el debate efectuado en el Congreso de los Diputados de España al respecto. En Amaranta Süss www.sinpermiso.info.

ante el propósito de restablecer los vínculos con Latinoamérica.

Ante la gestión de Zapatero, se evidenció la heterogeneidad de una región que cada vez más requiere de políticas diferenciadas y donde el surgimiento o consolidación de gobiernos de izquierda, promueven una relación entre iguales y reivindicativa de los derechos sociales en América Latina.

Ante el citado contexto, el POSE se comprometió a instrumentar un nuevo compromiso con la región y desmarcarse de las proyecciones básicamente economicistas del PP; así como, iniciar la reconstrucción de un diálogo político autónomo e independiente de los designios estadounidenses. También promovió el rescate de España como interlocutor privilegiado entre América Latina y la UE.

Sin embargo, el pragmatismo instrumentado por el PSOE en defensa de los intereses económicos y políticos de España, condujeron al pronto establecimiento de alianzas con gobiernos conservadores en la región: garantes de los intereses transnacionales de España. Contexto sobre el cual algunas multinacionales españolas mantuvieron prácticas laborales, corporativas, estándares de servicio y respeto del medioambiente verdaderamente distante de los comportamientos que tienen en España y otras partes de Europa.³⁰

El nuevo panorama político latinoamericano, cuyo auge de la izquierda y espíritu integracionista es notorio, ha limitado las citadas prácticas empresariales y catalizado el rechazo de diversos actores sociales en la región; particularmente cuando el capital español ha incursionado en sectores considerados estratégicos por los nuevos gobiernos, tales son los casos del gas, el petróleo, la electricidad, el agua, o aquellos que tienen un fuerte impacto en la orientación del crecimiento económico como el sector financiero.

En otro orden, el compromiso gubernamental (PSOE) de facilitar la inversión y cooperación española hacia la región sufrió un significativo desgaste en el contexto de la crisis económica global. Los enormes recortes presupuestarios implementados por el PSOE, implicaron una reducción del 20% en términos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) entre el 2009 y 2011. Específicamente en el 2011 los países receptores dejaron de percibir 600 millones de euros de la cooperación española. En lo que se refiere a la distribución geográfica, los fondos destinados a AL cayeron casi un 19%.

La inversión de capital también ha experimentado, como tendencia, una paulatina reducción. En el año 2000 las inversiones directas cayeron un 13% frente a las de 1999, y durante el 2001 los países latinoamericanos

³⁰ Entre los que sobresalió Colombia y México. En este último caso, la evidente apuesta por el candidato de la derecha, Felipe Calderón, durante el proceso electoral de 2006, constató la continuidad de una política exterior economicista y excesivamente pragmática hacia la región. En Juan Pablo Soriano: "España y América Latina durante el gobierno Zapatero: La difícil reconstrucción de los puentes", *Monografías del Observatorio de Política Exterior Europea*, No. 4, Bellaterra Barcelona, febrero 2008.

recibieron un 11% menos que en el 2000. Durante el mandato de Zapatero se apreció una continuidad de la tendencia descrita: la inversión acumulada entre 1996 y 2007, hasta septiembre, ascendió a 110 mil millones de euros, de los cuales 93 mil millones se invirtieron entre 1996 y 2003; evidenciándose una disminución paulatina que llegó a un ritmo de 2 200 y 2 600 millones durante los años 2006 y 2007, respectivamente.

En otro orden, el papel de España como interlocutor entre América Latina y la UE obtuvo sobrios resultados durante la gestión del PSOE. Las condiciones para un avance significativo en las relaciones euro latinoamericanas eran discretas, tal como fuera reconocido por el propio liderazgo español: “Desgraciadamente, y hay que decirlo a nuestros socios iberoamericanos, Iberoamérica no está en la agenda europea”.³¹

Nuevamente el componente bi-regional y la promulgada Asociación Estratégica quedaban rezagados ante el avance de asociaciones a escala sub-regional y la mayor atención de actores individuales. Entre estos se destacaron Brasil y México, oficialmente reconocidos como socios estratégicos de la UE.

Sin embargo, esta no es una situación que pueda atribuirse a la falta de ímpetu por parte de España, las causas más profundas se hallan en el lugar periférico que ocupa la región ante el conjunto de prioridades

externas del bloque, y particularmente la conjugación de problemas internos que ha debido enfrentar la UE, entre los que aparecen la crisis institucional y las consecuencias de la crisis económica mundial para el bloque.

Al respecto, la presidencia de España del Consejo de la UE durante el primer semestre de 2010, fue un contexto propicio para medir sus fuerzas en el ámbito comunitario, y particularmente la capacidad de reforzar el papel de la Unión en América Latina.

La presidencia estuvo condicionada por los impactos de la crisis global, mientras que en el orden institucional, Madrid asumió la puesta en marcha de una nueva arquitectura presentada en el Tratado de Lisboa. En este sentido, el carácter de transición y la existencia de nuevos actores políticos; así como las competencias conferidas a los mismos, implicaron un importante reto organizativo durante el semestre, en un contexto sumamente complejo tanto a nivel nacional como europeo.

Siguiendo el patrón descrito anteriormente, durante la presidencia española los socios comunitarios avanzaron particularmente en asociaciones sub-regionales y en sus relaciones con actores de interés.

En dicho contexto, correspondió a Madrid ser anfitriona de la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe, cónclave al que varios Estados le otorgaron un bajo perfil, dejando

³¹ Miguel Ángel Moratinos: (título) *Europa Press*, 13 de octubre de 2005.

entre dicho el escaso nivel de convocatoria español. Particularmente llamó la atención, por la parte europea, la ausencia de primeros ministros como David Cameron, de Reino Unido, y Silvio Berlusconi de Italia; de los presidentes latinoamericanos Hugo Chávez, de Venezuela; Raúl Castro, de Cuba, y José Mujica, de Uruguay. En el caso de Honduras, la no presencia del presidente golpista Porfirio Lobo constituyó un triunfo de los principales líderes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) que condicionaron su asistencia a la exclusión del mencionado gobernante.

Entre los resultados del encuentro aparece la firma de un nuevo tipo de convenio con Perú y Colombia, llamado Acuerdo Comercial Tripartito, el cual constituyó, en esencia, un tratado de libre comercio de amplio alcance. En el marco de la cumbre UE-Centroamérica fue rubricado el Acuerdo de Asociación con esta región; paralelamente, se efectuaron encuentros bilaterales con Chile y México. En la cumbre bilateral UE-CARIFORUM se concretó la firma del Acuerdo Cotonou II. En un contexto similar, engrosó los resultados de la gestión española el anuncio del reinicio de las negociaciones con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) paralizadas desde 2004.³²

Otra de las prioridades declaradas por la Presidencia española, aunque no plasmada explícitamente en su

programa, se dirigió a lograr cambios en los vínculos Unión Europea-Cuba, encaminados en lo esencial a sustituir la Posición Común por un nuevo marco bilateral de relaciones.

Sin embargo, la Presidencia española y especialmente la gestión del canciller Miguel Ángel Moratinos no pudieron vencer los obstáculos que se les presentaron durante el semestre. En ello influyó particularmente la fuerte campaña anticubana orquestada por varios actores europeos, entre los que se destacaron el Partido Popular, y Estados miembros como es el caso de Suecia y la República Checa; y en sentido general, la oposición de fuerzas conservadoras que hoy condicionan e incluso pueden llegar a determinar la proyección política del bloque.

No obstante, la decisión comunitaria de posponer la revisión de la Posición Común, hecho que estuvo condicionado por la falta de consenso al interior de la UE y las expectativas que levantarían las conversaciones entre el Estado cubano y la Iglesia Católica, abrieron nuevas posibilidades en el contexto del diálogo político propuesto por la UE a Cuba en 2008 e iniciado en el 2009. Las posiciones defendidas por el PSOE, en el marco de la UE, evidenciaron el abandono de una alianza incondicional con los EE.UU., que había constituido el núcleo de la política exterior del PP. Con su ascenso al poder en 2004 también fue rectificada la

³² Para una mayor profundidad sobre el tema consultar: Colectivo de Autores. Balance de la presidencia española del Consejo de la UE y perspectivas de la belga. Departamento de Asuntos Regionales y Globales del Centro de Estudios Europeos. Documento inédito.

proyección bilateral hacia Cuba, y trasladada a la UE sus consideraciones sobre la ineficacia de las sanciones adoptadas contra la Isla en el 2003; así como la necesidad de restablecer un diálogo político.

Como resultado de dicho proceso; y en un marco de fuertes presiones estadounidenses, se introdujo la eliminación de las sanciones de 2003 y la oferta de iniciar un diálogo político.³³ Cuba reaccionó aceptando sobre bases recíprocas, sin condicionamientos, con pleno respeto a la igualdad soberana de los Estados y del marco jurídico y el ordenamiento institucional de las partes, así como en total apego al principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Acerca del hecho vale destacar que el cambio de orientación comunitario en sus relaciones con Cuba, evidenciado en la eliminación de las sanciones y la oferta de diálogo político; no responde a un cambio esencial en el consenso ideológico existente en la UE respecto al sistema político cubano. Sus proyecciones siguen respondiendo al propósito de favorecer una transición en la Isla similar a la esteuropea.

Sin embargo, ante las proyecciones de fuerza del bloque se ha impuesto la posición inquebrantable del pueblo cubano y su Estado de no aceptar condicionamientos e injerencias en sus relaciones bilaterales. La ineficiencia y escasa incidencia

que en el contexto sociopolítico tuvieron las sanciones y la propia Posición Común, aún vigente, ha sido el catalizador esencial de la reconsideraciones comunitarias.

No obstante, las relaciones políticas promovidas por el PSOE hacia la Isla desataron una nueva dinámica tanto en las relaciones bilaterales como en el tratamiento del tema Cuba en distintas instancias de la UE. En este contexto se restableció la cooperación y el diálogo político bilateral. También se reanudó la cooperación parte importante de los Estados comunitarios, lo cual evidenció el estrecho marco de la posición común y su inoperatividad en términos prácticos.

Consideraciones finales

El propósito de dilucidar el rol asumido por España en las relaciones políticas internacionales y específicamente en su proyección hacia América Latina, implicó estudiar las variables que condicionaron su comportamiento en el marco de la UE.

Yendo de lo general a lo particular, uno de los elementos a destacar es la acelerada transnacionalización de la economía mundial y sus consecuencias. Ante un proceso objetivo e irreversible como este, expresado en una creciente interdependencia e interconexión de los mercados, los capitales y las naciones, la incorporación al modelo de integración

³³ Representantes el Departamento de Estado Norteamericano realizaron recorridos por Europa en días previos al inicio del proceso de discusión. Intercambios con las cancillerías de importantes países miembros y acciones directas en Bruselas persiguieron incidir en el resultado de las negociaciones.

europeo fue apreciado por la elite política española como un paso indispensable para su desarrollo económico.

Asimismo, la confrontación suscitada a raíz de la muerte de Franco entre los partidarios del continuismo y de aquellos sectores favorables a una democratización del sistema, mantuvo latente durante el proceso de transición español la posibilidad de una reedición del militarismo franquista. Este ambiente de incertidumbre condicionó las posiciones de amplios sectores de la sociedad en los marcos del proceso integracionista, visto en este caso, como el posible garante de la democratización del sistema político español.

Acerca de la inserción de España en el ámbito de las relaciones internacionales, si bien se dieron los primeros pasos durante el preludio de la guerra fría, la entrada en la CEE se interpretó como la definitiva eliminación del aislamiento vivido por esta nación, como resultado de su alianza con el bloque nazi fascista durante la Segunda Guerra Mundial.³⁴

Podríamos concluir que estos elementos, además de condicionar la proyección de España en los marcos del proceso integracionista, constituyeron variables objetivas que a corto y mediano plazos, determinaron que este país se distinguiera, en el marco de la UE, por ser un país euro optimista y por tanto, favorable a la

profundización de la Unión tanto en el ámbito económico como político. Este elemento puede considerarse un rasgo esencial. Si bien los Estados miembros han logrado avanzar en la formulación e instrumentación de importantes mecanismos integracionista de carácter económico; por el contrario, en el orden político han existido dificultades para alcanzar una mayor coordinación.

En sentido general, el marcado activismo evidenciado por España en un contexto caracterizado por la paulatina derechización del espectro político euro occidental, y la instrumentación de políticas socioeconómicas de corte neoliberal; condujeron a que asumiera y promoviera desde los marcos de la UE, mecanismos que estuvieron dirigidos a garantizar, en primera instancia, la competitividad e intereses geoestratégicos del bloque.

Con el fiel propósito de alcanzar los criterios de convergencia económica exigidos por la UE, el Gobierno español ha implementado políticas socioeconómicas restrictivas; expresadas en la privatización de empresas públicas, flexibilización del mercado laboral y la reducción de los gastos sociales. Mientras se aplicaron estas políticas, la proyección gubernamental se ha dirigido a legitimar y a profundizar el modelo integracionista de la UE, lo cual evidencia las dicotomías existentes entre las posiciones asumidas por la elite polí-

³⁴ El reconocimiento de España dentro del bloque occidental tuvo a los EE.UU. como máximo velador. Las negociaciones hispano-norteamericanas llegaron hasta un acuerdo militar en 1953; en 1955 España fue admitida en la ONU, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

tica en los marcos del proceso de integración, y alguno de los intereses prioritarios de los ciudadanos.

Otro de los elementos que ha distinguido la proyección de España en los marcos de la UE, particularmente durante los gobiernos del PSOE, ha sido el propósito de fomentar posiciones comunes en el contexto internacional. Entre sus fines implícitos estuvo mitigar las deficiencias de la Unión como actor regional y global, y acentuar alguno de los campos tradicionalmente prioritarios de la acción exterior española.

Este rasgo adquirió una connotación especial a partir del colapso del campo socialista y la inminente configuración de un mundo unipolar. En este escenario España fue promovida por el liderazgo comunitario como un ejemplo a seguir por parte de las exrepúblicas socialistas y el liderazgo de izquierda en América Latina. Su asimilación "pacífica" de los cánones de la democracia occidental e incorporación a la OTAN, avalaron el citado rol.

Así, este país apoyó un grupo de iniciativas que tuvieron como objetivo instrumentar en las repúblicas de Europa del Este; y AL, las pautas de la economía de mercado y por ende, colocar a sus pueblos a merced del gran capital.

En el orden de la defensa, España también ha actuado consecuentemente con su condición atlantista. Nada tuvo de casual que presidiera en el año 1991 la primera reunión conjunta de ministros de asuntos exteriores de la OTAN y de los anti-

guos miembros del Pacto de Varsovia. Su objetivo implícito fue facilitar la captación de los países anteriormente vinculados a la órbita soviética, garantizando así los intereses geoestratégicos de las potencias occidentales. Ha participado en varias contiendas militares, destacándose entre las contemporáneas las agresiones imperialistas contra Irak y Afganistán. Asimismo, ha concedido el desarrollo de la identidad comunitaria en el orden de la seguridad como un complemento de la OTAN y no como una alternativa de esta.

En los marcos de la política exterior comunitaria, España también se ha distinguido por ser el punto principal de referencia y mediador para la proyección de la UE hacia América Latina. Este rasgo guarda relación con los lazos históricos y culturales que unen a este país con la región, pero su móvil esencial ha sido la imperiosa necesidad de establecer sus propias aéreas de influencia.

En este sentido, el rol desempeñado por España se caracteriza por el marcado propósito de instrumentar una proyección homogénea y cohesionada del bloque hacia América Latina. Según el discurso político promulgado ante los principales órganos decisorios de la Comunidad, la UE debía contribuir al establecimiento de la paz, la democracia, y fomentar el crecimiento y bienestar económico de la región.

Sin embargo, en su papel como interlocutor para las relaciones de occidente con Latinoamérica, el Es-

tado español ha asumido, en lo fundamental; un papel de socio útil, en una división del trabajo dirigida a defender los intereses del capital español. En el orden bilateral, las alianzas políticas también han estado condicionadas por el propósito de transnacionalizar sus capitales; ante lo cual el mercado latinoamericano ha constituido una estructura necesaria para su desarrollo empresarial, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas.

Es necesario insistir en el carácter imperialista del proyecto europeo: la participación de sus miembros en invasiones militares, la injerencia en los asuntos internos de terceros Estados, el acrecentado papel del capital financiero, la ayuda al desarrollo cada vez más vinculada a intereses de política exterior, el progresivo desmontaje del denominado Estado de Bienestar Social, la precarización del

empleo, el aumento de la diferenciación entre pobres y ricos, y la privatización de los servicios públicos, son algunos de los ejemplos que lo evidencian.

Toda esta situación sustentada en el auge del conservadurismo, la división y debilidad de las fuerzas denominadas de izquierda, y el ascenso de los nacionalismos, el racismo y la xenofobia

En las condiciones del mundo contemporáneo, dónde el fracaso de las políticas neoliberales son una realidad; se impone pues, consolidar nuestras propias fórmulas de concertación política e integración económica. Nuestra América ha dado pasos importantes en pos de su verdadera emancipación, la constitución del ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) son un exponente de ello.